

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

Magistrada Ponente.

Apelación – Auto	
DEMANDANTE	MARÍA DEL CARMEN OSSA ROMERO
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la AFP PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-013-2022-00451-02
TEMAS	Graduación de las costas
DECISIÓN	Confirma el valor fijado

Medellín, ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARÍA DEL CARMEN OSSA ROMERO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** y la **AFP PROTECCIÓN S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 012**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

A N T E C E D E N T E S

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., contra el auto proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 2 de febrero de 2024, el cual impartió aprobación a la liquidación secretarial de costas procesales impuestas en la respectiva instancia.

Al respecto, debe recordarse que la señora MARÍA DEL CARMEN OSSA ROMERO solicitó judicialmente la declaratoria de ineficacia de su afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por la AFP PROTECCIÓN S.A., y que en consecuencia, se declare su permanencia sin solución de continuidad al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, ordenándose a AFP PROTECCIÓN S.A., a trasladar a COLPENSIONES las sumas cotizadas por la actora, debiendo ordenar a esta última entidad recibir dichas sumas, aceptar a la demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral, y condenando a las codemandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

Igualmente imploró condenar a la AFP PROTECCIÓN S.A., al reconocimiento y pago de los perjuicios morales causados, estimándolos en la suma equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o el valor que el juez considere.

En sentencia del 24 de agosto de 2023, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación, al advertir que la AFP PROTECCIÓN S.A. no cumplió con su carga probatoria de acreditar haber brindado asesoría suficiente a la demandante, por lo que le impuso a dicha entidad, la obligación de trasladar a

COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo para el efecto cotizaciones, cuotas y/o gastos de administración vigentes a partir del 14/03/1997, exclusivamente por la afiliación de la señora MARIA DEL CARMEN OSSA ROMERO, con los rendimientos que se hubieren causado, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales, debidamente indexados.

En concordancia, ordenó a COLPENSIONES a recibir tales sumas de dinero y a activar la afiliación de la señora MARÍA DEL CARMEN OSSA ROMERO, al régimen de prima media con prestación definida.

De otro lado, declaró improbadas las excepciones de mérito propuestas por las demandadas y condenó en costas procesales a la AFP PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho la suma equivalente a 2 SMLMV para el año 2023, absolviéndola de la pretensión relativa a la pretensión de indemnización de perjuicios morales.

La sentencia de primera instancia fue conocida por este Tribunal de Distrito Judicial en apelación presentada por los apoderados judiciales de la AFP PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, e igualmente bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 19 de octubre de 2023, en la cual se ACLARÓ el numeral segundo de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar que los tres conceptos que la AFP PROTECCION S.A., debía trasladar debidamente indexados a COLPENSIONES, corresponden a: los gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima.

Se ADICIONÓ ese mismo numeral, a efectos de ORDENAR que la AFP PROTECCIÓN S.A., al momento de cumplir la orden, remita a COLPENSIONES, la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

Confirmándose en todo lo demás la sentencia de primer grado, e imponiendo las costas procesales de la segunda instancia a cargo de la AFP PROTECCIÓN y COLPENSIONES, fijándoles como agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE ALZADA

Una vez resueltos los recursos de apelación, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de la administradora pública de pensiones, fue devuelto el expediente al juzgado de origen, el A Quo mediante auto del 2 de febrero de 2024, ordenó que a través de trámite secretarial se liquidaran las costas procesales, por las siguientes sumas:

A CARGO DE PROTECCIÓN SA Y EN FAVOR DE MARIA DEL CARMEN OSSA ROMERO	
Agencias en Derecho en 1ª Instancia.....	\$2.320.000
Agencias en Derecho en 2ª Instancia.....	\$1.160.000
Gastos	\$0
TOTAL.....	\$ 3.480.000
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$3.480.000)	
A CARGO DE COLPENSIONES Y EN FAVOR DE MARIA DEL CARMEN OSSA ROMERO	
Agencias en Derecho en 1ª Instancia.....	\$0
Agencias en Derecho en 2ª Instancia.....	\$1.160.000
Gastos	\$0
TOTAL.....	\$ 1.160.000
Son: UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000)	

En providencia de la misma fecha, se le impartió aprobación a dicha liquidación por parte del A Quo.

La apoderada judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A. recurrió en reposición y en subsidio apelación el valor liquidado por concepto de costas procesales.

La juez de primer grado mediante proveído del 23 de febrero de 2024, negó el recurso de reposición, argumentando que la fijación de las agencias en primera instancia a cargo de la AFP accionada se encontraba acorde a las tarifas y criterios establecidos en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y ordenó la remisión del expediente digital a este Tribunal de Distrito Judicial, para surtir la alzada.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La apoderada judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., refiere no compartir la liquidación de costas procesales y agencias en derecho, al considerar que las sumas fijadas no tuvieron en consideración la naturaleza y calidad del proceso, como tampoco la gestión del apoderado de la parte demandante, como quiera que, la condena obedeció a que los Tribunales acogen la interpretación que ha hecho la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la validez del acto jurídico del traslado, el cual se circunscribe a que, los fondos privados acrediten que suministraron la información en los términos y con el alcance que ha indicado la referida Alta Corporación, exigencia que resulta un imposible, se impusieron cargas probatorias que no existían para el momento en que ocurrió el hecho de la vinculación del afiliado.

Aseguro el recurrente que la gestión realizada por el apoderado de la parte actora se limitó argumentar que a su representado no se le suministró la información, sin requerir esfuerzo probatorio para acreditar tal hecho, además la problemática a resolver, no revestía mayor ofrece complejidad para la parte actora, y al ser ello así, las

costas procesales debieron cuantificarse en el mínimo que establece la norma.

Alegatos de conclusión

Encontrándose en la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., expuso los argumentos fácticos y jurídicos por los cuales considera se debe REDUCIR el valor de las costas y agencias en derecho, pues según refiere la naturaleza de este proceso es de carácter meramente declarativo y sus pretensiones están orientadas a una obligación de hacer, por lo que no se deben tomar en cuenta pretensiones pecuniarias para fijar un porcentaje o una tarifa exacta de agencias en derecho.

Solicita valorar al momento de la decisión la BAJA complejidad de esta clase de asunto, en atención al precedente jurisprudencial decantado y pacífico que ha establecido la CSJ sobre la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, por lo que este proceso no requiere del apoderado demandante una gestión mayoritaria o desgastante toda vez que no debe controvertir un número considerable de excepciones, el debate probatorio está centrado en negaciones indefinidas sin apoyo de pruebas especiales o extraprocesales y por el contrario se limita al decreto de pruebas documentales.

Finalmente resalta que la AFP PROTECCIÓN S.A. ha actuado de manera oportuna y diligente atendiendo al principio celeridad procesal, dando respuesta oportuna e inmediata, facilitando el desarrollo ágil del proceso, y este buen actuar debe ser apreciado al momento de fijar las agencias en derecho.

Por su parte, el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. Cesar augusto bedoya Restrepo, portador de la T.P. N° 270.007 del

C. S. de la J., a quien se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario, presentó sus alegatos de conclusión en segunda instancia, solicitando allí la revocatoria de la sentencia proferida en primera instancia y en consecuencia se absuelva a la entidad, de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas de un proceso corren a cargo de *“...la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...”*.

Dicha disposición consagra un criterio objetivo que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis.

Las costas del proceso comprenden, de un lado, los gastos judiciales que haya hecho la parte beneficiada con la condena y que aparezcan comprobados en el expediente y del otro, las agencias en derecho, en las que, para su fijación por el juez *“deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”* (Artículo 366, numeral 4º del CGP).

De otro lado, el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece en su artículo 2° los criterios a tener en cuenta para la fijación de tales emolumentos:

“ARTÍCULO 2°. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

PARÁGRAFO. Cuando el asunto objeto del proceso esté relacionado con la violencia de género y dentro de él se hayan acreditado las circunstancias constitutivas de la misma, el funcionario judicial al fijar agencias en derecho deberá realizar una valoración favorable de cargas y costos para las mujeres víctimas de aquella.”

Seguidamente, en lo que atañe a la tasación de las agencias en aquellos en los PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL, el mencionado acuerdo prescribe:

“ARTÍCULO 5°. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

En única instancia.

a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.

b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.

En primera instancia.

a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.

(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias,

entre 1 y 10 S.M.M.L.V.

En segunda instancia.

Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”

CASO CONCRETO

Vigencia de las normas reguladoras de la tasación de agencias en derecho en el Sub lite:

En el presente caso resulta aplicable la regulación establecida en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una demanda presentada en el año 2022.

También destaca la Sala que, al tratarse de un proceso ordinario laboral declarativo de doble instancia, y resultar la sentencia de primera instancia desfavorable para los intereses de la AFP PORVENIR S.A., el numeral 1° del artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, establece con absoluta claridad que las agencias en derecho en primera instancia tratándose de asuntos sin cuantía o de prestaciones pecuniarias, podrán ser tasadas por el administrador de justicia en una suma que puede oscilar entre uno (1) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Y en el presente caso la condena por AGENCIAS EN DERECHO en la primera instancia fue de \$2.320.000, equivalente a 2 SMLMV para la anualidad 2023, a cargo de la codemandada AFP PROTECCIÓN S.A.

Ahora, esta Sala considera que la fijación de las agencias en derecho, en lo que respecta a la primera instancia, sí se encuentra acorde a los criterios establecidos en el art. 2° del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, relativos a la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás

circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

Y es que, si bien es cierto el asunto puesto a consideración de los estrados judiciales, no revestía ninguna complejidad jurídica y probatoria, por el contrario, la problemática de la nulidad y/o ineficacia del acto jurídico de traslado entre regímenes pensionales por falta de consentimiento informado del afiliado, es una postura ya pacífica en nuestra jurisprudencia nacional, está sola circunstancia no podía ser la causa, para tasar agencias en derecho en PRIMERA INSTANCIA en suma inferior a 2 SMLMV para el año 2021.

Lo anterior, por cuanto este proceso judicial también debió surtir las mismas instancias previstas en el procedimiento laboral, y satisfacer en igual medida, las exigencias formales y todo el rigor procesal de otro tipo de procesos de naturaleza más compleja.

El apoderado judicial de la demandante, debió estar atento a todo el transcurso del proceso, asistir a las audiencias, y preparar los recursos y alegaciones que hicieren falta para la resolución oportuna y sin dilaciones de la litis, y toda esa gestión no se ve recompensada, cuando las agencias en derecho se tasan en casi el mínimo de la tarifa permitida por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

Advirtiéndolo la Sala, que lo común del proceso, no puede ser el criterio que debe prevalecer al momento de la liquidación de las agencias en derecho, pues todo proceso judicial, independientemente de la facilidad de su trámite y resolución, conlleva unos costos para las partes que en él intervienen, como es el caso de los honorarios profesionales, que se causan a favor de los

profesionales del derecho que ejercieron la representación de los contendientes.

Así las cosas, estima la Sala que una suma acorde a la gestión desplegada por el mandatario judicial, la complejidad del proceso, las excepciones formuladas, el tiempo transcurrido en las instancias, entre otros, sería aquella equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2023, como bien lo concluyó la juez de primer grado.

Y en relación a las agencias en derecho en segunda instancia, la Sala también las estima ajustadas a las tarifas y criterios antes señalados, pues fueron fijadas en cuantía de \$1.160.000, equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023, que es precisamente el tope mínimo establecido para la segunda instancia.

Sin necesidad de mayores apreciaciones sobre el caso, se CONFIRMARÁ el valor liquidado por concepto de agencias en derecho en las instancias.

Sin COSTAS en esta actuación.

D E C I S I Ó N

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,**

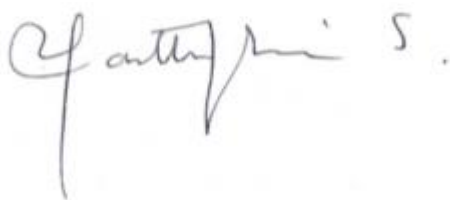
R E S U E L V E:

Primero: CONFIRMAR la providencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, por las razones aquí expuestas.

Segundo: Sin Costas en esta actuación.

Tercero: Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto, y devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
ESTADOS N° 059 del 9 de abril de 2024.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>.